



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

|                   |   |
|-------------------|---|
| DEMANDANTE        | Francisco Horacio Escobar Cardona   |
| DEMANDADAS        | Fabricato S.A.  |
| TIPO DE PROCESO   | Ordinario   |
| RADICADO NACIONAL | 05001-31-05-016-2021-00524-01   |
| ASUNTO            | Apelación de auto que denegó el decreto de práctica de prueba                                   |
| DECISIÓN          | Revoca y deja sin efectos lo actuado a partir del auto que resolvió sobre el decreto de pruebas |

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ** y la Ponente **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, dentro del proceso ordinario laboral promovido por **Francisco Horacio Escobar Cardona** contra **Fabricato S.A.**, se resuelve recurso de apelación frente a la decisión adoptada por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el 9 de octubre de 2023, mediante la cual denegó el decreto de pruebas a ambas partes.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda<sup>1</sup>

El señor Francisco Horacio Escobar Cardona formuló demanda ordinaria laboral contra Fabricato S.A. pretendiendo en que se declare que **i)** el señor Luis Fernando Escobar Escobar al momento de su fallecimiento dejó reunidos los requisitos para que el demandante, en calidad de hijo inválido, fuera

<sup>1</sup> 01PrimerInstancia; 003Demanda\_p4-p22.pdf. Pág. 1/5

acreedor de la sustitución pensional, y en virtud de ello pide se condene a la demandada **ii)** al reconocimiento y pago de dicha prestación de forma vitalicia en un 100% desde el momento de su fallecimiento, así como al pago de **iii)** intereses moratorios o en subsidio la indexación de las condenas; **iv)** costas del proceso y **v)** lo ultra y extra petita.

Lo anterior, fundamentado en que nació el 1° de junio de 1960, es hijo del señor Luis Fernando Escobar Escobar y Mariela Cardona de Escobar. Su padre fue trabajador de Fabricato S.A., de quien recibió pensión de jubilación, y falleció el 18 de febrero de 1982. Narró que desde temprana edad ha recibido atención psiquiátrica y fue diagnosticado con síndrome de Diógenes, por lo que siempre ha dependido económicamente de su padre, y tras su fallecimiento, de su madre con la sustitución pensional que le fue asignada de su padre, hasta que esta falleció el 8 de enero de 2021. Señala que la Junta Regional de Calificación de Antioquia calificó su pérdida de capacidad laboral –PCL- mediante dictamen N°64944 del 19 de enero de 2019 en un 53.5%, por síndrome mental orgánico y deficiencia en la agudeza visual, los cuales afirma padece desde niño. El 28 de mayo de 2021 solicitó a Fabricato S.A. el reconocimiento de la sustitución pensional, la cual fue negada el 11 de junio de 2021 por no contar con fecha de estructuración anterior al fallecimiento de su padre.

Para acreditar lo anterior, solicitó el decreto de pruebas documentales y la testimonial de los señores Alberto Franco Palacio, Luz Elena Franco Palacio, Luz Marina Escobar, Luis Fernando Escobar, Alba Lucía Escobar, Gabriela Escobar, Guillermo León Escobar y Martha Elena Escobar Cardona.

### **Oposición a las pretensiones de la demanda**

**Fabricato S.A.**<sup>2</sup> se opuso a todas las pretensiones incoadas en su contra. De un lado aseveró que con la documental allegada al plenario se evidencia que el actor para el momento en que falleció su padre realizaba actividades productivas que le generaban ingresos, lo que desvirtúa cualquier dependencia económica respecto de su padre, así como tampoco le consta la que afirma continuó respecto de su madre, circunstancia que además debe acreditarse, pues el ordenamiento jurídico no prevé la “sustitución de la sustitución”. Señaló además, que hay actuar temeroso por parte de la activa, al alegar un estado de

---

<sup>2</sup> 01PrimerInstancia; 008ContestacionDemandaFabricato\_p109-p131.pdf

invalidez para la época del deceso del causante, cuando en realidad tal estado no existía para esa fecha, pues del historial clínico se evidencia que aun cuando en los años 1985/1988 el demandante presentó afectaciones depresivas, ello no generó imposibilidad para desarrollar actividades cotidianas o productivas, por el contrario, de esa prueba se desprende que su estado de invalidez derivó de un evento de un Trauma Cráneo Encefálico –TCE- en el año 2007, lo que realmente derivó en la disminución de su capacidad cognitiva y laboral, y que posteriormente derivó en su estado de invalidez, como se lee de la sustentación del dictamen por parte de la JRCIA, que particularmente no fue aportado por la activa.

Excepcionó: inexistencia de dependencia económica y del estado de invalidez del solicitante al momento del deceso del causante, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar sustitución pensional al señor Francisco Horacio Escobar Escobar, buena fe, pago y compensación, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y prescripción.

Solicitó como prueba el decreto de documental, el interrogatorio de parte y oficio dirigido a Hospital San Vicente Fundación con el fin de que aporte historial clínico del demandante, relacionado con el TEC que este sufrió en el año 2007, ya que esta información goza de reserva legal y por tanto debe ser el despacho quien por orden judicial lo requiera.

### **Decisión objeto de recurso<sup>3</sup>**

El 9 de octubre de 2023 se llevó a cabo audiencia regulada por el artículo 77 del CPTSS, y en la etapa de decreto de pruebas, el A-quo denegó la testimonial solicitada por la activa por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 212 del CGP, por no señalar cuáles son los hechos objeto de prueba. Aun cuando decretó el interrogatorio del demandante y la documental, omitió pronunciarse respecto de la prueba oficiosa requerida por la demandada.

---

<sup>3</sup> 01PrimerInstancia; 015 grabación audiencia completa – P232-p232.mp4

## Recurso de reposición y en subsidio apelación

Inconforme con la decisión adoptada, **la apoderada de la parte demandante** formuló recurso de reposición y en subsidio de apelación, argumentado que en el presente caso es necesario escuchar la versión de los testigos dado que lo pretendido es la sustitución pensional y que Fabricato S.A. al contestar la demanda negó la dependencia económica del demandante respecto del pensionado fallecido, y al no existir documental que de cuenta de ello, los testigos son los únicos que pueden dar cuenta de las circunstancias de tal dependencia económica, esto es desde cuándo, por qué se dio y en qué se basó.

De otro lado, **la apoderada de la demandada** formuló los recursos de ley por no haber decretado la prueba de oficioso, lo que sustentó en que se trata una prueba conducente, pertinente y necesaria, ello, porque si bien está acreditado que el estado de invalidez se originó por un accidente en el año 2007 fecha en que se estructuró su invalidez, sin embargo, convenientemente, la activa no aportó la historia clínica que da cuenta de las verdaderas afecciones del demandante, de manera que tal prueba resulta relevante para que salgan avante las excepciones formuladas por la pasiva. Adicionalmente indicó que la entidad cumplió con solicitar la prueba mediante petición ante el Hospital, sin que haya sido suministrada tal información como se desprende de la respuesta dada por la entidad, por estar dicha información sujeta a reserva legal que solo puede ser suministrada por autorización del paciente o por orden judicial.

El juez A Quo ratificó lo decidido, y agregó respecto del primer recurso que no encuentra sentido ni pertinencia en que se pretenda con la testimonial acreditar la dependencia económica respecto del causante, pues no es objeto de discusión que el causante se pensionó desde el año 1968, falleció en el año 1982 y la invalidez del demandante data del año 2007. Sobre el recurso de la demandada por considerar la prueba impertinente por no ser un punto objeto de debate que la estructuración de la invalidez del demandante es del año 2007, pues la historia clínica diría lo mismo que ya se señaló en el dictamen de PCL. Concedió el recurso de alzada en el efecto devolutivo, remitiendo el expediente al H. Tribunal Superior de Medellín para su conocimiento.

A continuación, emitió sentencia por la cual absolvió a Fabricato S.A. de todas las pretensiones incoadas en su contra. Declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación. Condenó en costas al demandante y fijó como

agencias en derecho la suma de \$1'300.000. Decisión contra la cual se formuló y sustentó recurso de alzada por parte del demandante.

### **Alegatos de conclusión en segunda instancia**

Concedido el término para alegar de conclusión en esta sede ambas partes lo describieron. Fabricato S.A.<sup>4</sup> exclusivamente respecto a la sentencia de instancia solicitando se confirme, más no se pronunció sobre el recurso contra el auto que denegó la práctica de pruebas. La parte demandante<sup>5</sup> insistió en la necesidad de la testimonial para que con ello pueda acreditarse la dependencia económica del demandante respecto del causante, resaltando que desde los 20 años de edad padece de afecciones en su salud que no le permitieron llevar una vida normal, y si bien la FE es del 5 de diciembre de 2007, con posterioridad al fallecimiento de su padre, lo cierto es que las Altas Cortes han dispuesto que esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y los dictámenes proferidos por las Juntas de Calificación, no gozan del soporte suficiente para considerarse como fundamentos legítimos y constitutivos de la sustitución pensional, al no contener las condiciones reales en que se desarrolló y evolucionaron sus dolencias.

Esta Sala para resolver, se permite formular las siguientes,

## **II. CONSIDERACIONES**

En primera medida, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el Art. 57 de la Ley 2ª de 1984 y los artículos 15 B-1, 65 N°4 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: *“el que deniegue el decreto o la práctica de una prueba”*.

Según el alcance de la sustentación del recurso de apelación, el problema jurídico a resolver en esta sede consiste en determinar, si en el presente caso es procedente o no acceder a la prueba testimonial solicitada por la activa, así como al oficio deprecado por el demandado ante el Hospital San Vicente

---

<sup>4</sup> 02SegundaInstancia; 04AlegatosFabricato1620210524.pdf

<sup>5</sup> 02SegundaInstancia; 05AlegatosDemandante1620210524.pdf

Fundación para que allegue el historial clínico relacionado con el TEC sufrido por el demandante en el año 2007.

**a) Sobre la aplicación del artículo 212 del CGP en materia laboral.**

Debe indicarse en primer lugar que la Carta Política consagra como derecho fundamental el debido proceso, en virtud del cual, los ciudadanos tienen derecho a que, en las actuaciones judiciales o administrativas en los que intervengan, se respeten las formas propias de cada juicio, así como a presentar pruebas y a controvertir las que presenten en su contra.

Así, bajo esta prerrogativa, toda persona inmersa en un proceso o procedimiento tiene derecho a utilizar todos los medios probatorios pertinentes que resulten necesarios para acreditar los hechos que sirven de fundamento a su pretensión o a su defensa.

Dentro de los medios probatorios establecidos por el legislador para ejercer el derecho de defensa se encuentra el TESTIMONIO, el cual, consiste, según el tratadista Jairo Parra Quijano: *“en el relato **de un tercero** al juez sobre el conocimiento que tenga de hechos en general<sup>6</sup>”,* siendo el testigo aquella persona distinta de la parte que suministra información relacionada con los hechos objeto de investigación o controversia.

Ahora, el **artículo 212** del estatuto procesal, enunciado por el A Quo para denegar la testimonial solicitada por la parte demandante, prevé que *“Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba”.*

Sobre la aplicación de las reglas procedimentales contenidas en el CGP en materia laboral, resulta oportuno traer a colación una de las diferencias más relevantes entre los procesos de carácter civil y laboral, de cara a la utilización del estatuto procesal contenido en el módulo sobre la “integración del Código General del Proceso al Proceso del Trabajo y la Seguridad Social<sup>7</sup>” emanado del Consejo Superior de la Judicatura, dispuesto como material permanente de

---

<sup>6</sup> Tratado de la prueba judicial el testimonio, pág. 3.

<sup>7</sup> Silvia Romero, Marcel. La integración del Código General del Proceso al Proceso del Trabajo y la Seguridad Social. Módulo de la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2015.

apoyo para los jueces labores, donde se precisa que los principios labores y procesales labores, no deben ser sacrificados en virtud de las disposiciones del CGP, e incluso se resalta, deben separarse las figuras jurídicas allí previstas que sean incompatibles con los principios y normas procesales del estatuto laboral, y solo acudirse a aquellas cuando exista un vacío en la norma laboral y no sea posible acudir a lo dispuesto en el artículo 40 del CPTSS referente al principio de libertad de forma, y cuando sean compatibles con los principios del derecho que el juez laboral preside. Lo anterior en virtud del ámbito social que contemplan los derechos laborales, además de su conexión con múltiples derechos de carácter fundamental.

De otro lado, la H. CSJ en sede de tutela en **STL4403 de 2019**, al conocer de una acción en que la parte pasiva en el marco de un proceso ordinario, se opuso a que se decretara la práctica de la prueba testimonial de la parte actora, por cuanto esta “*omitió enunciar los hechos respecto de los cuales iban a deponer los testigos*”, señaló que:

*“la determinación adoptada por el Juzgado accionado, al « decretar la práctica de los testimonios», aun cuando la petición no reunía los requisitos del artículo 212 del C.G.P, se evidencia que la fundamentación de su decreto no es por amaño o capricho, pues esta soportado en la condición que tiene el Juez, como «Director del Proceso», criterio también invocado por el Tribunal censurado, quien después de hacer el análisis pertinente concluyó, que cuando la prueba se requiere para lograr el esclarecimiento de los hechos, debe permitirse el decreto de la práctica, conforme lo consagra el artículo 54 del C.P.L., lo que en modo alguno comporta vulneración al debido proceso de la parte demandada, en tanto que a la misma le asiste el derecho de defensa y contradicción en la etapa subsiguiente al decreto de la práctica. Por todo lo anterior, precisa esta Corporación, que las decisiones del Juzgado de conocimiento y del Tribunal en su calidad de Juez constitucional están arraigadas en argumentos que consultaron las reglas mínimas de razonabilidad jurídica y que, sin lugar a dudas, obedecieron a la labor hermenéutica propia del juez (...)” (Resaltos propios)*

También resulta de suma importancia, recabar sobre **el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades del proceso**, contemplado en el artículo 228 de la Constitución Política, el cual tiene desarrollo legal en el artículo 11º del CGP, aplicable al procedimiento laboral por remisión analógica del artículo 145 del CPTSS, en virtud del cual, se establece para el Juez la regla consistente en que al momento de interpretar las normas de carácter procesal, “...*deberá tener en cuenta que el objeto de*

*los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial...”*

Así lo ha considerado la honorable Corte Constitucional, Corporación que a través de su jurisprudencia ha indicado:

*“Los jueces deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales dentro del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jurídico preestablecido se solucionen los conflictos de índole material.*

*Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material (art. 228).”<sup>8</sup>*

De ahí viene el especial cuidado que deben tener los jueces al analizar las peticiones que deba resolver, pues no es dable confundir el respeto a las formas procesales con un desproporcionado formalismo, lo cual ha sido calificado por el Alto Tribunal Constitucional como verdadera vía de hecho por “exceso ritual manifiesto”. Al respecto señaló: *“En conclusión, el defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto” se presenta cuando el funcionario judicial, por un apego extremo y aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial.”<sup>9</sup>*

Pues bien, en el subilte se tiene que para fundamentar sus peticiones, el demandante narró<sup>10</sup> que es hijo de Luis Fernando Escobar Escobar y Mariela Cardona de Escobar, que su padre fue trabajador de Fabricato S.A. y recibió pensión de jubilación por parte de dicha empresa, y falleció en febrero de 1982, indicó además que ostenta una PCL del 53.5% acorde a lo dictaminado por la JRCIA el 19 de enero de 2019, por lo que solicitó la sustitución pensional ante

---

<sup>8</sup> Sentencias T1306 de 2001, reiterada en las sentencias T-793 de 2013, T 237 de 2017, entre otras.

<sup>9</sup> Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-268 de 19 de abril de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

<sup>10</sup> 01PrimeraInstancia; 003Demanda\_p4-p22.pdf. Pág. 1/5



Fabricato S.A., la cual fue negada por no tener una FE anterior al fallecimiento de su padre, aspectos respecto de los cuales allegó prueba documental<sup>11</sup>.

Ahora, en los hechos séptimo, décimo y undécimo adujo el demandante que el señor Luis Fernando Escobar Escobar era quien se encargaba del sustento del hogar, por lo que siempre dependió económicamente de éste, y tras su fallecimiento, dependió de su madre a quien le fue reconocida la sustitución pensional, lo que ocurrió hasta el fallecimiento de esta, el 8 de enero de 2021.

Así, de una lectura juiciosa de lo pretendido y el fundamento fáctico en que se basa, sin hesitación alguna se logra entender que la finalidad de la prueba testimonial, era reseñar sobre las condiciones de dependencia económica del demandante respecto de su padre, quien es el causante de la prestación que se depreca vía sustitución pensional, más aún, cuando la parte pasiva de la Litis, al responder sobre esos tres hechos<sup>12</sup>, negó su veracidad, porque según la sociedad, de la documental arrimada se evidencia que el actor derivaba ingresos de actividades productivas, lo cual en su sentir, desvirtúa tal dependencia, razón por la cual, resulta evidente la controversia en torno a tal punto.

En ese entendido, no resulta razonable para esta Sala de Decisión acoger la interpretación del A Quo, pues admitirla para rechazar la prueba según las voces del artículo 212 del CGP, constituye en un *exceso ritual manifiesto*, que impediría el adecuado ejercicio probatorio que tiene el demandante con el fin de demostrar un eventual derecho, que de ningún modo se puede ver limitado por una formalidad, y que derivaría además en la afectación del derecho a la tutela judicial efectiva, por la anteposición del derecho adjetivo sobre el derecho sustancial, por lo que habrá de **revocarse** lo decidido.

#### **b) De la prueba de oficio solicitada por la demandada.**

Dispone el artículo 48 del CPTSS que: “El Juez dirigirá el proceso en forma que garantice su rápido adelantamiento, sin perjuicio de la defensa de las partes”. A su vez, el artículo 51 del ibídem, nos indica que son admisibles todos de prueba establecidos en la Ley y por su parte, el artículo 53 faculta al juez para

---

<sup>11</sup> 01PrimeraInstancia; 004AnexosDemanda\_p4-p23-p97.pdf.

<sup>12</sup> 01PrimeraInstancia; 008ContestacionDemandaFabricato\_p109-p131.pdf

rechazar de forma motivada, la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito.

Al momento de fijar el litigio el juez de instancia lo centró en establecer, si al demandante le asiste al derecho al reconocimiento a una pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del Luis Fernando Escobar, así como al pago de intereses moratorios.

Ahora, al resolver la reposición contra el auto que negó la prueba de oficio para que se aporte historia clínica del demandante, consideró que tal prueba no es pertinente por no ser un punto objeto de debate que la estructuración de la invalidez del demandante es del año 2007, pues la historia clínica diría lo mismo que ya se señaló en el dictamen de PCL. A su vez, la demandada sustentó que el oficio deprecado es una prueba conducente, pertinente y necesaria, porque a pesar, que el estado de invalidez está probado, afirma que este realmente derivó de un accidente en el año 2007 cuando se dictaminó su FE, no obstante, la activa se abstuvo de aportar historia clínica que puede dar cuenta de las verdaderas afecciones del demandante, y con ello se podría probar los medios exceptivos formulados al dar respuesta a la demanda.

Ahora bien, lo pretendido con la prueba oficiosa es tener aparte de la historia clínica del demandante relacionado con el TEC que padeció en el año 2007, documental a la cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución 1995 de 1999, solo puede acceder: 1) el usuario, 2) el equipo de salud, 3) las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos en la ley, y 4) las demás personas determinadas en la ley.

Aunado a lo anterior, la **Ley 57 de 1985** previó en su **artículo 20** que *“El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo prescrito en este artículo.”*

En esa misma vía, el artículo **27 de la Ley 1755 de 2015** por la cual se regula el derecho fundamental de petición al consagrar la inaplicabilidad de excepciones, señaló que *“El carácter reservado de una información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus*

*funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo”*

Ahora, si bien en principio le asiste razón al juez A Quo en torno a que la FE no es punto de debate en el proceso, resulta relevante resaltar el hecho decimotercero<sup>13</sup> descrito por el actor al indicar que “(...) *se vislumbra de toda la prueba documental que se aporta que su patología que hoy fue objeto de calificación la viene padeciendo desde cuando era un niño, a pesar de que no haya sido calificada tal y como lo afirma su historia clínica y conceptos médicos*”, por su parte la convocada al litigio contravirtió tal afirmación<sup>14</sup> y señaló que el estado de invalidez del actor derivó de la secuela del evento sufrido por este en el año 2007, y que las dolencias o patologías anteriores a este, “*no le generaron al mismo, ni invalidez ni imposibilidad alguna para procurar su propia subsistencia*”.

Al verificar la documental allegada por la activa, se observa solo copia parcial de su historia clínica con apartes de consultas del año 1985 a 1988, y una consulta del año 2014.

De manera que como lo pretendido es una sustitución de la pensión reconocida al causante, bajo el argumento de que el actor cuenta con un estado de invalidez y dependía económicamente de su padre, la activa desde el líbello introductor si aseveró que las afecciones en su estado de salud datan desde su niñez, circunstancia que le impidió desplegar, entre otras, actividades económicas para derivar un sustento propio, lo que niega la pasiva, entre otras razones porque la historia clínica permite entrever que si desplegaba oficios con los que obtenía ingresos.

Como vemos la parte demandada sustentó suficientemente en la apelación lo que pretende con la prueba de librar oficio que le fue negada, y no las encuentra esta instancia dentro de las dispuestas en el artículo 53 del estatuto procesal laboral como legalmente prohibidas, ineficaces, que versen sobre hechos notorios, impertinentes y/o superfluas. Además, al haber cumplido la carga que le asistía de gestionar por petición la prueba pedida de librar oficio<sup>15</sup>, la cual no fue suministrada por ostentar carácter de reserva legal, deviene

---

<sup>13</sup> 01PrimeraInstancia; 003Demanda\_p4-p22.pdf. Pág. 2

<sup>14</sup> 01PrimeraInstancia; 008ContestacionDemandaFabricato\_p109-p131.pdf Pág. 14/16

<sup>15</sup> 01PrimeraInstancia; 010AnexosContestacionDemanda\_p167-p204.pdf Págs. 30/38

necesario **revocar** la decisión apelada para en su lugar ordenar el decreto y práctica de tal prueba.

Así las cosas, al salir avante ambos recursos de apelación en torno a la negativa del decreto de pruebas necesarias a ambas partes, necesario es dejar sin efectos lo actuado a partir del auto que decretó las pruebas inclusive, sin que afecte las decretadas y practicadas válidamente, para en su lugar, retome el proceso desde esa etapa, disponiendo el decreto de pruebas según lo acá ordenado.

### **III.COSTAS**

Sin costas en esta sede por haber salido avante los recursos de apelación de ambas partes.

### **IV. DECISION DEL TRIBUNAL**

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: REVOCAR** la decisión proferida el 9 de octubre de 2023 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario de primera instancia promovido por FRANCISCO HORACIO ESCOBAR CARDONA contra FABRICATO S.A. en cuanto denegó la práctica de pruebas, para en su lugar,

**a)** Dejar sin efectos lo actuado a partir del auto por el cual se resuelve sobre el decreto de pruebas inclusive, de conformidad con lo dispuesto en la motiva de esta decisión para que continúe el proceso desde esta etapa, sin afectar la validez de la prueba que si fue decretada y practicada; y en consecuencia se dispone **b)** decretar y practicar las pruebas solicitadas por ambas partes que versan sobre el objeto del presente recurso.

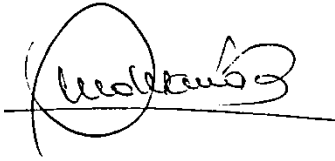
**SEGUNDO:** Sin costas en esta sede.

Se ordena notificar por estados,

Las Magistradas,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ

Certifico que el auto anterior fue notificado  
por ESTADOS N° 203 fijados hoy 27 de  
noviembre 2023 a las 8:00AM

\_\_\_\_\_  
El secretario